

Señor(a)

Juez en lo contencioso administrativo¹

Guadalajara de Buga, Valle del Cauca

Asunto: Demanda

Respetado(a) Sr(a). juez,

Enrique Botero Villa, mayor, domiciliado en Medellín, identificado con Cédula de ciudadanía n° 1.017'160.456, portador de la Tarjeta profesional de abogado n° 209.146, actuando como agente oficioso de Cacharrería mundial, S.A.S., impedida como se encuentra para hacerlo por sí misma, por la presente demanda, me permito someter a su control, según lo prevenido en el art. 138 del Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo (Cód. proc. adm.), los actos administrativos de los que haré relación más adelante, así:

Título Primero

El medio de control

Capítulo Primero

Las partes

i. Demandante:

Cacharrería mundial, S.A.S., domiciliada en Medellín, identificada tributariamente con el n° 890.903.436-2, representada legalmente por Álvaro Andrés de la Espriella Betancur, mayor, domiciliado en Medellín, identificado con Cédula de ciudadanía n° 98' 564.769.

ii. Demandado:

Restrepo (Valle del Cauca), entidad territorial del orden municipal, identificada tributariamente con el n° 891.902.191-2, representada legalmente por su alcalde, el Sr. Edilson Navia Ortega, mayor, domiciliado en Restrepo, cuyo número de documento de identidad se desconoce, y que, a través de la Secretaría de hacienda, proveyó el acto administrativo cuyo anulamiento se pretende.

¹ A quien por reparto corresponda el conocimiento de la demanda.

Capítulo Segundo

Las razones

§

Sección Primera

Razones de hecho

Primera:

Cacharrería mundial, S.A.S., es una compañía que, entre otras varias actividades, tal como consta en su “objeto social”, se dedica principalmente a:

“[...] El envasado distribución, promoción, publicidad, venta y en general todas las actividades relacionadas con el mercado de aerosoles de pintura, pinturas de variedades diversas y adhesivos para la industria, la oficina y el hogar [...]”

Segunda:

Aun cuando el domicilio principal de la empresa es Medellín, lo cierto es que en Yumbo (Valle del Cauca) –y en otras ciudades del país, que no vienen al caso–, tiene asiento un establecimiento de comercio que le pertenece a la demandante y en el cual se perfeccionan las ventas de los productos que son requeridos por clientes situados, por ejemplo, en el municipio de Restrepo.

Tercera:

Al punto de perfeccionarse las ventas, los productos antedichos son despachados a quienes los demandan en Restrepo desde el establecimiento de Yumbo, o, si no, desde cualesquiera otros de los establecimientos que la demandante tiene en el territorio colombiano.

Cuarta:

El 25 de junio del 2015 le fue notificado a la demandante un acto administrativo denominado “EMPLAZAMIENTO PREVIO POR NO DECLARAR”, producido por el Secretario de hacienda de Restrepo, y por el que se dijo que:

“[...] el Secretario de Hacienda del municipio de RESTREPO (Valle del Cauca), Emplaza al contribuyente CACHARRERIA MUNDIAL S.A.S con Nit. 890.903.436-2, para que dentro del término de un (1) mes, contado a partir de la notificación del presente Acto, cumpla con la

obligación de presentar su declaración del Impuesto de Industria y Comercio, correspondiente al año gravable 2010, de conformidad con el Artículo 715 del Estatuto Tributario Nacional [...]"

Quinta:

Al cabo del procedimiento administrativo, y a despecho de las razones manifestadas por la demandante en la respuesta al “emplazamiento”, el demandado proveyó, el 26 de agosto del 2015, la “RESOLUCIÓN SANCIÓN POR NO DECLARAR N. 2015-SH-76606-052”, por la que resolvió lo siguiente:

“[...] ARTÍCULO 1: Imponer sanción por no haber presentado la declaración de Industria y Comercio por el año gravable 2010 al contribuyente CACHARRERIA MUNDIAL S.A.S. con Nit., 890.903.436-2, por la suma de \$826.756.00 [...]"

Sexta:

La demandante, a la Resolución sancionadora antedicha, opuso un recurso de reconsideración, el cual fue despachado adversamente mediante la “RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN NÚMERO SF-76606-0019”, del 1º de agosto del 2016.

Séptima:

Actualmente, en el Juzgado primero (1º) en lo contencioso administrativo de Guadalajara de Buga, con el número de radicación 2016-270, promovida por la demandante, se tramita una demanda por la cual se pretende el anulamiento de las resoluciones mencionadas en las razones “Quinta” y “Sexta” (*supra*).

Octava:

El 21 de septiembre del 2016 le fue notificada a la demandante la “LIQUIDACIÓN DE AFORO Nro. 76606-SF-0009-2016” del 1º de septiembre del 2016, por mérito de la cual el demandado decidió:

“[...] ARTÍCULO 1: Determinar la obligación tributaria al contribuyente CACHARRERIA MUNDIAL S.A.S., con Nit. 890.903.436-2 mediante [sic] la presente liquidación de Aforo por no haber presentado la declaración del impuesto de Industria y Comercio, por el año gravable 2010, por la suma de \$413.378.00 [...]"

Novena:

La demandante, con respecto a la “liquidación de aforo”, presentó un recurso de reconsideración en el que se lee que:

“[...] Cacharrería [sic] no está sujeta al impuesto de industria y comercio en el municipio de Restrepo por cuanto, en razón a la estructura funcional de ventas se evidencia lo siguiente:

1. La compañía en su establecimiento de comercio ubicado en el municipio de Yumbo determina el número y los productos que comercializará desde allí a las diferentes jurisdicciones del país, en este caso en particular al municipio de Restrepo.
2. La definición y autorización del precio de los bienes es determinado por el coordinador de ventas en las oficinas ubicadas en el municipio de Yumbo, desde donde se remite dicha información a los compradores.
3. El plazo tanto de entrega como de pago de la mercancía se establece por parte del coordinador de ventas ubicado en las oficinas de Yumbo, desde donde envían al comprador las condiciones establecidas con observancia de la disponibilidad y transporte de productos.
4. La venta está sujeta a la aprobación de las condiciones del coordinador de ventas y del área de cartera, quienes están ubicados en una jurisdicción diferente al Municipio de Restrepo [sic] y por lo tanto no explotan de manera alguna la infraestructura de este municipio.
5. La actividad de comercialización sólo es posible bajo la gestión y administración desde el establecimiento de Yumbo, lugar donde se desarrolla toda la gestión de la fuerza de ventas, y se coordina la gestión de cartera y despacho de mercancías que está fuera de la jurisdicción de Restrepo, razón por la cual la única actividad que se lleva a cabo en este municipio es la captura de un pedido, el resto de las actividades se llevan a cabo en la ciudad de Yumbo, jurisdicción donde se paga la totalidad de los tributos por estos ingresos [...]

Décima:

El demandado, por fin, reaccionó proveyendo la “RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN A LA LIQUIDACION DE AFORO [sic] DE AFORO Nro. SF-76606-105” del 10 de febrero del 2017, por el cual resolvió:

“[...] CONFIRMAR la liquidación de AFORO N° 76606-SF-0009-2016 del 01 de septiembre de 2016, proferida por la Secretaria Financiera Municipal [sic] de la Alcaldía de Restrepo (Valle), mediante la cual se Liquidó [sic] el impuesto de industria y comercio, año gravable 2010, en cuantía de \$413.378.00 [...]

Razones de Derecho

Parágrafo Primero De las normas “violadas”

La “actuación administrativa” constituida por las resoluciones números 76606-SF-0009-2016 del 1º de septiembre del 2016 y SF-76606-0105 del 10 de febrero del 2017, es violatoria de las normas que se deducen de los siguientes preceptos:

i. Art. 32 de la Ley 14 del 1983:

“[...] El Impuesto de Industria y Comercio recaerá, en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos [...]”

ii. Art. 343 de la Ley 1819 de 2016.

“[...] Territorialidad Del Impuesto De Industria Y Comercio. El impuesto de industria y comercio se causa a favor del municipio en el cual se realice la actividad gravada, bajo las siguientes reglas: Se mantienen las reglas especiales de causación para el sector financiero señaladas en el artículo 211 del Decreto Ley 1333 de 1986 y de servicios públicos domiciliarios previstas en la Ley 383 de 1997.

1. En la actividad industrial se mantiene la regla prevista en el artículo 77 de la Ley 49 de 1990 y se entiende que la comercialización de productos por él elaborados es la culminación de su actividad industrial y por tanto no causa el impuesto como actividad comercial en cabeza del mismo.

2. En la actividad comercial se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

a. Si la actividad se realiza en un establecimiento de comercio abierto al público o en puntos de venta, se entenderá realizada en el municipio en donde estos se encuentren.

b. **Si la actividad se realiza en un municipio en donde no existe establecimiento de comercio ni puntos de venta, la actividad se entenderá realizada en el municipio en donde se perfecciona la venta. Po lo tanto, el impuesto se causa en la jurisdicción del municipio en donde se convienen el precio y la cosa vendida.**

c. Las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, compras en línea, tele ventas y ventas electrónicas se entenderán gravadas en el municipio que corresponda al lugar de despacho de la mercancía.

d. En la actividad de inversionistas, los ingresos se entienden gravados en el municipio o distrito donde se encuentra ubicada la sede de la sociedad donde se poseen las inversiones. [...]”

[La negrilla y la subraya son ajenas al texto original]

iii. Art. 75 del Acuerdo n° 0034-12 del 2012:

“[...] El impuesto de industria y comercio recaerá, en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio, incluidas las del sector financiero y aquellas en quienes se realice el hecho gravado, a través de consorcios, uniones temporales, comunidades organizadas, en quienes se figure el hecho generador del impuesto, que ejerzan o realicen en el Municipio de Restrepo, directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos [...]”

iv. Art. 483 del Acuerdo n° 0034-12 del 2012:

“[...] Los contribuyentes del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros, deben presentar la declaración de este impuesto a más tardar el último día hábil del mes de Junio y se pagara conjuntamente al momento de presentar la declaración.
[...]”

v. N° 1 del art. 499 del Acuerdo n° 0034-12 del 2012:

“[...] La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de:

1. Fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por la Administración Tributaria Municipal, para las declaraciones presentadas oportunamente.

[La negrilla y la subraya son ajenas al texto original]

Parágrafo Segundo
Alegato de la “violación”

Artículo Primero
Cacharerría mundial, S.A.S. no realizó el “hecho generador” del impuesto de industria y comercio en Zarzal

Aunque, en lo que atañe a la no realización del “hecho generador” del impuesto, son tres los enunciados normativos que se presentan como “normas violadas” (art. 32 de la Ley 14 del 1983, art. 343 de la Ley 1819 de 2016, y art. 75 del Acuerdo n° Acuerdo n° 0034-12 del 2012) en realidad de todos se deduce uno y el mismo mandato, o, para ser más exacto, la “norma violada” está contenida en los tres enunciados dichos.

Sabido esto, falta establecer en qué consiste la “violación” de la norma, lo cual se dirá a continuación:

Además de las de industria y servicio, es materia imponible, según la terminología de la Ley 14 del 1983, la actividad comercial, que es, justamente, la ejercida por la demandante.

En la susodicha Ley 14, en el art. 35, hay un intento de definición de actividad comercial, que me permito transcribir:

“[...] Se entienden por actividades comerciales, las destinadas al expendio, compraventa, o distribución de bienes o mercancías, tanto al por mayor como al por menor, y las demás definidas como tales por el Código de Comercio siempre y cuando no estén consideradas por el mismo Código o por esta Ley, como actividades industriales o de servicios [...]”

Contrastado el tenor literal de la disposición del art. 35 con la realidad empresarial de Cacharrería mundial, S.A.S., resulta, entonces, que ésta se dedica a la venta –por la vía de contratos de compraventa, como no puede ser de otro modo– de bienes o mercancías tales como los que aparecen descritos en su objeto social.

Lo expuesto hasta ahora no debería representar ninguna dificultad como no sea porque, faltando la comprensión del régimen normativo que gobierna las compraventas en que interviene la demandante, debe faltar, por necesidad, la certeza del lugar, o sea de la “jurisdicción municipal”, en que el negocio es ajustado; a la sazón el criterio crucial para la realización de la hipótesis a la cual ha sido enlazada la obligación de tributar.

A los fines de remontar la dificultad acusada, y puesto que la compraventa también es un contrato, huelga repasar los preceptos del Código de comercio (Cód. co.) que dicen relación con la perfección de los contratos, siendo el principal de ellos el art. 864, de acuerdo con el cual:

“[...] El contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial, y salvo estipulación en contrario, se entenderá celebrado en el lugar de residencia del proponente y en el momento en que éste reciba la aceptación de la propuesta [...].”

Hasta el cansancio, con ocasión de la discusión previa que mantuvo con la Administración tributaria de Restrepo, la demandante manifestó tener establecida su residencia en Yumbo, lo cual, por su vitando desconocimiento de la legislación pertinente a este asunto, amén de un afán obcecado de hacer recaudo, fue desdeñado por la Secretaría de hacienda como si se tratara de un subterfugio para evadir el pago del tributo; ahora es cuando se echa de ver que no había tal, y que, pese a no ser suficiente, la sede del vendedor es un requisito necesario para la determinación de la obligación impositiva.

Es que no es del caso negar que Cacharrería mundial, S.A.S. ha celebrado negocios de venta con personas residenciadas en Restrepo sirviéndose de “ruterios de ventas” que están habilitados, solamente, para divulgar el catálogo de los productos del resorte de la compañía, y, en el mejor de los casos, cautivar clientes mediante la recepción de pedidos que, antes de dar paso a alguna compraventa, deben ser evaluados por el “coordinador de ventas”, en Yumbo, quien, después de todo, se ocupa de la elaboración de la oferta y, cuando quiera que esta sea aceptada, de su recepción.

Por esto, si el “hecho generador” del impuesto es la compraventa de mercaderías, y los presupuestos de la perfección de la actividad contractual caracterizada como “materia imponible” son los que están aducidos en el art. 864 del Cód. co., entre los cuales se cuenta el

lugar de residencia del proponente, es decir del vendedor, es decir, en tratándose de la demandante, Yumbo, no tiene caso que se persista en achacarle el incumplimiento de una obligación que no tiene, para lo cual se recurre al expediente tan deleznable de aducir argumentos que, cuando no vienen a cuento, inducen una deformación del sentido prístino de la disposición rectora, especialmente en lo que atañe al origen de la obligación.

Véase un ejemplo del argumento del primer tipo, esto es, de los que no vienen a cuento:

“[...] el Representante legal y Revisor de Fiscal de dicha empresa [de Cacharerría mundial, S.A.S.], enviaron la relación de personas naturales y jurídicas a los cuales esta empresa comercializo [sic] productos en los años requeridos, además los valores del total de los ingresos antes de iva [sic] y devoluciones en el Municipio de Restrepo, esta información se le pidió por parte de la Secretaria Financiera [sic] que fuera extraída de los libros de contabilidad registrados en la Cámara de Comercio y llevados de acuerdo a las normas legales y respaldados por comprobantes internos y externos, **lo que hace evidente que existió un hecho generador por parte del Contribuyente [sic] CACHARRERIA MUNDIAL S.A.S., en nuestro municipio**[...]”²

[La negrilla y la subraya son ajenas al texto original]

Véase un ejemplo del argumento del segundo tipo, esto es, de los que deforman la disposición rectora:

“[...] la actividad de comercialización de productos que ustedes han venido desarrollando en nuestra jurisdicción son gravadas con el impuesto de industria y comercio, **La ley 14 de 1983, no hace distinción de la forma como se realiza la negociación, expendio o comercialización de los bienes o productos, lo que determina en su esencia en que se debe tributar donde se obtiene el ingreso, porque se está procurando un beneficio económico en dicha jurisdicción y hubo aprovechamiento de su mercado** [...]”³

[La negrilla y la subraya son ajenas al texto original]

Lo que hasta ahora se ha dicho, desde antiguo –1996, lo menos– y hasta los días que corren, ha sido sostenido por el Consejo de Estado, para lo cual me permito transcribir algunos apartes de los cuales se deduce la “ratio” de tres sentencias por las que hubo de decidirse un diferendo parecido al que nos ocupa:

i. Sentencia del 7 de junio de 1996⁴:

“[...] Ya en reiteradas oportunidades la Sala ha precisado que una de las características del impuesto de industria, comercio y avisos en su carácter local, que restringe su ámbito de aplicación y sus alcances a los límites territoriales del respectivo municipio. No se pueden

² Véase la pág. 5 de la Resolución n° SF-76606-0105 del 10 de febrero del 2017.

³ Véase la pág. 3 del “Anexo” de la Resolución n° 76606-SF-0009-2016.

⁴ Expediente n° 7670; Cn. ponente: Dr. Delio Gómez Leyva.

gravar así las actividades realizadas en un determinado municipio, sujetas allí a gravamen, en cualquiera otra localidad aduciendo que es en esta última a donde se destina, o consume el producto, pues por una parte **el hecho generador no es el consumo de bienes y servicios sino la prestación de actividades industriales, comerciales y de servicios y por la otra, el sujeto pasivo del gravamen no se sitúa en el lugar de consumo sino en el lugar en donde se realice la actividad gravada.**

De aceptar la tesis de la apoderada de Medellín implicaría gravar absolutamente en este Municipio la totalidad de las empresas cuyos productos se consumen en este Municipio incluidas las ventas efectuadas por sociedad en el extranjero, que escapan obviamente a la actividad impositiva del Estado Colombiano.

Así las cosas, no podía la Administración de Medellín imponer gravámenes sobre ventas efectuadas en otros municipios, distintos a su jurisdicción pues la Ley 14 de 1983 compilada en el Decreto ley 1333 de 1986, lo que señala es el hecho generador y la base gravable y no puede un municipio incluir en ésta ingresos percibidos por la comercialización de los bienes producidos, cuanto ésta se efectúa en otros municipios. [...]

[La negrilla y la subraya son ajenas al texto original]

ii. Sentencia del 28 de julio del 2005⁵:

“[...] De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, si bien la demandante tiene una agencia en Medellín, la misma no puede ser considerada como la infraestructura a través de la cual comercializa en ese municipio los medicamentos que produce en la ciudad de Cali, pues está acreditado que en Medellín sólo ejerce labores administrativas de coordinación y promoción, por cuanto allí toma los pedidos de compra de los productos elaborados por ella, y es en Cali, esto es, en la sede industrial, donde comercializa su producción, dado que desde esa ciudad despacha la mercancía que llega directamente a las oficinas de los compradores.

Además, en asunto similar al que aquí se debate, la Sala precisó que la labor de coordinación que tienen los representantes de ventas o visitadores médicos no es suficiente para entender que se realiza una actividad comercial, pues es en la sede industrial en donde el producto se comercializa.

En consecuencia, la actora no ejerció en Medellín ninguna actividad comercial gravada con el impuesto de industria y comercio [...]

[La negrilla y la subraya son ajenos al texto original]

iii. Sentencia del 28 de agosto del 2014⁶:

“[...] 2.2.1.- El impuesto de Industria y Comercio es un tributo municipal, que grava la realización de actividades industriales, comerciales y de servicio. Es criterio uniforme y consolidado de la Sala, que **su causación, cuando se trata de actividades comerciales de venta de bienes, tiene lugar en el sitio en que concurren los elementos del contrato de compraventa, esto es, el precio, el plazo de pago y la cosa que se vende.** Así mismo, que para determinar la jurisdicción en que se configura la obligación tributaria, no resulta relevante establecer el lugar desde el cual se realizan los pedidos.

⁵ Radicación n° 05001-23-24-000-01089-01(13885); Cn. ponente: Dr. Héctor Romero Díaz.

⁶ Radicación n° 25000-23-27-000-00123-01 (19256); Cn. ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

Ha señalado también la Sección, que la labor que efectúan los agentes de venta, es de coordinación, distinta por demás, a la de comercialización de bienes, y que por lo tanto, aquella no genera el tributo.

De manera, que “más que circunscribir la realización de la “actividad comercial” al domicilio principal del contribuyente, lo que procede es establecer el “Domicilio de ejecución de los contratos”, concepto que necesariamente se traduce en aplicar la ejecución de la actividad misma a la jurisdicción que el sujeto pasivo del ICA utiliza para lograr la consolidación de los negocios de los cuales deriva su ingreso [...]”

Baste, en lo inmediato, los razonamientos propios y los que se citaron del Consejo de Estado, para que, como se sostiene aquí, Ud., S.S., determine, con eficacia anulativa, la existencia de un defecto sustantivo en el acto administrativo por los que el demandado le constituyó a la demandante la obligación de abonar el impuesto de industria y comercio.

Artículo Segundo

Prescripción de la obligación tributaria que se le atribuye a Cacharrería mundial, S.A.S.

Se mandó lo siguiente por el n° 1 del art. 499 del Acuerdo n° 0034-12 del 2012:

“[...] La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de:

1. Fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por la Administración Tributaria Municipal, para las declaraciones presentadas oportunamente.

[La negrilla y la subraya son ajenas al texto original]

Entonces, puesto que la tributación por industria y comercio está “sujeta a declaración”, para saber cuál es el día a partir del cual se contabiliza la prescripción de la obligación, es preciso concordar el precepto transcripto con el del art. 483 del propio Acuerdo:

“[...] Los contribuyentes del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros, deben presentar la declaración de este impuesto a más tardar el último día hábil del mes de Junio y se pagara conjuntamente al momento de presentar la declaración. [...]”

En suma, significa esto que, para el cobro del impuesto por el año 2010, el demandado, a partir del 30 de junio del 2011 (data del término para que Cacharrería mundial, S.A.S. presentara la declaración) tuvo hasta el 30 de junio del 2016.

La resolución que contiene la liquidación del tributo, sin embargo, fue datada el 1º de septiembre del 2016 y le fue notificada a la demandante el 21 de septiembre del 2016, es decir, dos (2) meses y veintiuno (21) días después de que la obligación hubiere prescrito.

Capítulo Tercero

Las peticiones (el objeto)

Primera:

Anúlense las resoluciones números 76606-SF-0009-2016 del 1º de septiembre del 2016 y SF-76606-0105 del 10 de febrero del 2017.

Segunda:

Como restablecimiento del “derecho”, declárese la inmunidad de Cacharrería mundial, S.A.S. y la correlativa incompetencia de Restrepo, en la persona del secretario financiero, para imponerle a la primera la obligación de pagar el impuesto de industria y comercio por el año gravable 2010.

Título Segundo

Las pruebas

Capítulo Único

Documentales

§

Sección Primera

Que se presentan con la demanda

1. Copia de la “LIQUIDACIÓN DE AFORO Nro. 76606-SF-0009-2016” del 1º de septiembre del 2016;
2. Copia de la constancia de entrega expedida por Redetrans, S.A., datada el 21 de septiembre del 2016, de la “LIQUIDACIÓN DE AFORO Nro. 76606-SF-0009-2016” del 1º de septiembre del 2016.
3. Copia del “Recurso de Reconsideración a la liquidación de aforo No. 76606-SF-0009-2016” del 14 de octubre del 2016;
4. Copia de la “RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN A LA LIQUIDACION DE AFORO [sic] DE AFORO Nro. SF-76606-105” del 10 de febrero del 2017;

5. Copia de la constancia de entrega expedida por Redetrans, S.A., datada el 6 de marzo del 2017, de la “RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN A LA LIQUIDACION DE AFORO [sic] DE AFORO Nro. SF-76606-105” del 10 de febrero del 2017;

§

Sección Segunda

Por obtener mediante oficio

Con arreglo al art. 177 del Código general del proceso, le solicito, Sr(a). juez, que se sirva oficiar al Concejo municipal de Restrepo para que, a expensas de la demandante, con destino al expediente del proceso, expida una copia, con constancia de su vigencia, del Acuerdo n° 0034-12 del 2012.

Título Tercero

La cuantía

La estimo, según se deduce de las resoluciones cuyo anulamiento se pretende, en la cantidad de COP\$ 413.378.

Título Cuarto

La competencia

Con fundamento en el n° 2 del art. 156 y en el n° 3 del art. 155 del Cód. proc. adm., es Ud. competente para conocer de la demanda, en primera instancia.

Título Quinto

El procedimiento

Al proceso que se busca promover con la presente demanda, corresponde el trámite del procedimiento ordinario prevenido en los arts. 179 y ss. del Cód. proc. adm.

Título Sexto

Las comunicaciones del proceso

Las novedades del proceso pueden ser enteradas a las partes en las siguientes direcciones:

1. La demandante: Calle 19A n° 43B-41, Medellín; luis.ortega@grupomun.com;

2. El demandado: Carrera 11 n° 9-47, Restrepo; juridica@restrepovalle.gov.co;
3. El apoderado suscrito: Calle 7 Sur n° 42-70, of. 801, edificio Fórum, en Medellín; enriqueboterovilla@gmail.com

Título Séptimo

Los anejos

1. Los documentos indicados como pruebas documentales;
2. Certificado de existencia y representación legal de Cacharrería mundial, S.A.S.;
3. Copia de la demanda, con anejos, para el “traslado” del demandado;
4. Copia de la demanda, con anejos, para el “traslado” del agente del ministerio público;
5. Copia de la demanda para el Archivo del juzgado;
6. Copia de la demanda en medio magnético.

Medellín, a 4 de julio del 2017

Cordialmente,

Enrique Botero Villa

T.p. 209.146

C.c. 1.017'160.456